

Arqueología y público: Una para todos y todos para una

por Alberto León Muñoz

Toda sociedad que se precie de tener conciencia de sí misma comparte un pasado común, del que es heredera y deudora. Los bienes (materiales o no) de los que es depositaria imprimen de forma indeleble sus principales señas de identidad. Así, todos los miembros de la comunidad tienen el derecho de disfrutar de su patrimonio, pero, al mismo tiempo, deben asumir la responsabilidad que les corresponde en su preservación y enriquecimiento de cara al futuro. Hasta ahora, estas competencias se vienen delegando en las Administraciones públicas, que asumen en exclusiva el papel de garante de su tutela. Estos pueden ser, en esencia, los principios básicos a la hora de concebir y planificar la gestión del patrimonio cultural.

Los restos materiales conservados o recuperados en la actualidad constituyen uno de los testimonios más directos y elocuentes de ese pasado, por su capacidad de hacer presentes y tangibles las necesidades vitales y las inquietudes ideológicas de nuestros ancestros. Pero, a diferencia de otros testimonios arquitectónicos más monumentales, los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico -en muchos casos todavía desconocidos o enterrados-, adolecen de mayor fragilidad, al encontrarse expuestos a una más fácil destrucción. Esta circunstancia ha tenido una especial incidencia en las ciudades, donde las recientes actuaciones derivadas del planeamiento urbanístico han resultado extremadamente agresivas y destructivas con ellos. La amenaza que se cierne sobre este patrimonio exige, por tanto, la colaboración de las diferentes instituciones y sectores profesionales afectados y la implicación directa de la ciudadanía. Para eso, resulta vital el fomento de las labores de difusión.

Ya han quedado superados los tiempos en los que la arqueología se veía reducida al ámbito estrictamente académico, aquél en el que los especialistas, instalados en su torre de marfil, discutían con un críptico lenguaje científico sobre detalles imperceptibles para el gran público. A la mayoría de la población apenas llegaba una mínima parte de la información, cribada y distorsionada, en buena medida por intermediarios sometidos al imperio del marketing y la rentabilización a corto plazo, cuyas prioridades no eran, en absoluto, la divulgación del conocimiento histórico. Hoy, la arqueología, sin perder ni un ápice del rigor que debe sustentar cualquier proceso de investigación científica, asume como una de sus prioridades la difusión a la sociedad de los valores del patrimonio con el que trabaja, sin límite cronológico, geográfico ni temático. El objetivo ya no es sólo la reconstrucción de los procesos históricos del pasado, esto es sólo una parte; tan importante como aquélla es la correcta transferencia del conocimiento extraído de los restos materiales. La ciencia, y más concretamente la arqueología, tiene una responsabilidad social a la que debe hacer frente. De este modo, pierde sentido el discurso maniqueo entre la gran arqueología erudita y aquélla que se dedica prioritariamente a la difusión; es decir, la dicotomía entre academia y gestión patrimonial.

Surge y se consolida, de este modo, la denominada «arqueología pública», cuyo principio básico es la interacción con la sociedad. Hace hincapié en las posibilidades de dinamización económica y revitalización de las comunidades locales mediante el aprovechamiento y rentabilización de los vestigios conservados, y cubre así la creciente demanda de productos culturales. En estrictos términos económicos, el fiel de la balanza parece decantarse a favor de la potenciación del patrimonio arqueológico como recurso de futuro.

La arqueología, como cualquier otra disciplina cultural, está muy condicionada por las circunstancias socio-económicas que la rodean; no en vano es un claro indicador de la denominada «sociedad del bienestar». Tras una fase en la que el desmesurado proceso inmobiliario centraba las prioridades de gestión en la resolución de los problemas urbanísticos más perentorios, con la crisis se ha abierto una nueva etapa en la que se debe imponer la reflexión de cara al diseño del nuevo rumbo, marcado, en buena medida, por el refuerzo de las actividades de difusión. Con ello se pretenden dos objetivos fundamentales: romper con las erróneas y negativas corrientes de opinión sobre la figura del arqueólogo y cambiar, en última instancia, la actitud de la ciudadanía, de forma que adopte un papel más activo en la defensa, preservación y rentabilización de su patrimonio. La creación de asociaciones o fundaciones, y la participación en la confección y realización de todo tipo de actividades didácticas son sólo una muestra de las múltiples posibilidades de colaboración.

En definitiva, se ha abierto una nueva dinámica que refuerza la relación entre la arqueología y el público, en la que prevalecen la educación y la difusión para lograr una conexión más directa con los depositarios del rico legado patrimonial; sin olvidar, eso sí, que su estudio y tratamiento corresponden a los profesionales cualificados para ello. El reto está en conseguir que la arqueología, además de resultar atractiva a priori por el poder evocador de la ruina, lo sea por los valores que transmite y por su capacidad de convertirse en un recurso útil para la propia sociedad en estos «malos tiempos para la lírica».